

## CAPÍTULO XIV

**Sumario :** I. Poder judicial. Su poder moderador y conservador de la constitución nacional.—II. Número y gerarquía de los tribunales.—III. Duración de las funciones judiciales. Remuneración.—IV. Requisitos para ser miembro de la corte. Juramento.—V. Facultades legislativas y ejecutivas de la corte suprema.

Art. 94. « El poder judicial de la Nación será ejercido por una corte suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciere en el territorio de la Nación. »

Art. 95. « En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas. »

### I. Poder judicial. Su poder moderador y conservador de la constitución nacional.

El preámbulo de la constitución advierte que uno de sus grandes objetivos es el de «afianzar la justicia». Sus autores se penetraron de que las libertades públicas no prosperan sino con la aplicación estricta de la vieja máxima británica: *where there is a wrong, there is a remedy*: «allí donde hay un mal, allí también hay un remedio.»

No se concibe una sociedad civilizada sin que el Estado se preocupe de «dar á cada uno lo que es suyo», organizando los augustos tribunales encargados de desempeñar esa primordial atribución.

Los americanos del Norte, durante la época en que estuvieron sometidos al régimen anómalo de la Confederación, sintieron la falta de un poder judicial con jurisdicción en todos los Estados. Constituido un gobierno nacional, lo hemos dicho ya, tiene que dictar leyes para el bienestar general de los habitantes; debe celebrar tratados con las potencias extranjeras; establecer disposiciones económicas; dictar reglas para el comercio, para la navegación interior de los ríos, para el intercambio internacional, etc. Estas leyes y estos tratados pueden dar lugar á controversias entre los particulares, unas veces, entre la Nación y las provincias ó particulares, otras. Si no hay un poder judicial que las dirima, no existe un gobierno regular. Si los trece Estados de la Nación Americana, en 1787, no hubieran organizado tribunales de justicia con la competencia requerida para decidir cualquier litigio de carácter nacional, podía haberse presentado el caso de que una resolución dictada en New-York fuera distinta, antagónica, de otra resolución dictada en New-Hampshire; y si no hay una suprema corte de justicia, un tribunal superior que haga desaparecer los conflictos, la Unión deja de ser tal, para convertirse en una completa anarquía.

Alberdi ha fundado los motivos que hacen necesaria una justicia nacional ó federal en estos términos: « La constitución, las leyes y los decretos del gobierno nacional, los tratados de la República con las naciones extranjeras son leyes supremas ó nacionales, cuya interpretación y aplicación exigen una autoridad judicial de carácter y potestad nacionales ó suprema también, como esos estatutos. La aplicación de leyes que representen el interés de toda una nación no podría encomendarse, sin graves peligros de injusticia y de parcialidad, á tribunales y juzgados de provincia, sin responsabilidad ante el gobier-

« no nacional, que no los ha nombrado ni puede remover, y sin responsabilidad ante la República, cuya soberanía judicial no ejercen. Para que las leyes nacionales sean interpretadas imparcialmente, se necesitan jueces del mismo carácter, delegados de toda la Nación, nó de una provincia; nombrados y costeados por toda la República y responsables, según sus leyes, ante sus autoridades. » (1)

La función judicial del Estado es de rigor, en consecuencia, aún en aquellos países que han adoptado el régimen federativo, y la tendencia constitucional es de elevarla, en los detalles de la organización política, á la categoría de un *poder*, con atribuciones propias, con vida independiente, con esfera de acción peculiar, pero esa tendencia dista mucho de haber adquirido, en todas las naciones, un viril desarrollo. Es una aspiración, ora definida y consciente, ora indefinida é inconsciente, contra la cual se levantan por doquier múltiples obstáculos.

En la mayoría de los pueblos del viejo continente los tribunales aplican puramente las leyes sancionadas y promulgadas en forma. « La magistratura se encuentra subordinada de todo punto á la potestad legislativa; constituye menos un poder judicial, igual á los otros poderes, que una corporación eminente, encargada sólo de dar plena sanción á los decretos del legislador. » (2)

Los Estados Unidos tuvieron, en cambio, la visión neta de la importancia de la judicatura, y por una sabia combinación la elevaron al rango prominente que ocupa. « Lejos de estar siempre ligado por la voluntad parlamentaria, dice un comentador, el juez ame-

(1) ALBERDI.—« Organización de la Confederación Argentina » pág. 237.

(2) Véase POSADA.—« Tratado de derecho político » T. II. pág. 595.

«ricano no es su fiel intérprete, sino en tanto que ella  
«ha respetado los límites del pacto fundamental. An-  
«tes de aplicar las leyes, examina si son conformes  
«á la constitución; en caso contrario tiene el derecho  
«y el deber de considerarlas como no dictadas. Esta  
«intervención del juez en las fuentes mismas de la  
«ley crea un poder judicial en la más lata acepción  
«del término y lo clasifica á justo título como el ter-  
«cer poder del gobierno.» <sup>(1)</sup>

El mismo carácter tiene la justicia argentina. Su independencia está garantizada por preceptos diversos que oportunamente examinaremos. Uno de ellos es el contenido en el art. 95 que prohíbe al presidente de la Nación ejercer funciones judiciales y arrogarse el conocimiento de las causas pendientes ó restablecer las fenecidas, prohibición que parecerá redundante, observa Calvo, á quien ignore nuestra luctuosa historia civil.

Los tribunales ejercitan un poder moderador y conservador de la constitución nacional.

Es esta la ley suprema de la República. El congreso, sin embargo, es dable que en el hecho desconozca la letra ó el espíritu de sus cláusulas, dictando disposiciones que repugnen con los fundamentos de nuestro régimen. El poder ejecutivo, al expedir los reglamentos que tiene facultad de decretar, puede violar la constitución, las leyes ó los tratados. Las legislaturas de provincia, sus gobernantes, en general, en ejercicio de la potestad legislativa que les incumbe, pueden hollar los derechos individuales que el código político garante. Los tribunales locales pueden aplicar erróneamente las leyes federales y en perjuicio evidente de los habitantes del país, pueden pretender que primen

(1) DUC DE NOAILLES. — Cent ans de République, tomo II. pág. 142.

sobre ellas, los preceptos emanados de las autoridades provinciales.

En todos estos casos, la justicia nacional es llamada para resolver las disidencias, para mantener incólume la constitución, impidiendo que los otros poderes y que los centros seccionales salgan de su órbita de acción respectiva. El art. 109 acuerda á la corte suprema la facultad preciosa de mantener la tranquilidad y la paz internacionales, preceptuando que «ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra provincia»; que «sus quejas deben ser sometidas á la corte suprema de justicia y dirimidas por ella.»

No hay un poder del congreso, del presidente ó de las provincias; no hay una sola libertad individual que no pueda ser materia de decisión de los tribunales federales, y es en esta extensión del poder judicial que se ha encontrado la mejor salvaguardia de las instituciones.

Si los tribunales argentinos interpretan las leyes con tanta latitud que lleguen hasta suprimir sus efectos, podría pensarse, acaso, que son los árbitros más encumbrados del mecanismo gubernamental y que los otros departamentos están sometidos á su acción.

La opinión se ha dividido en Estados Unidos, donde la discusión ha sido ardiente.

Unos afirman que la supremacía del criterio judicial es indispensable para asegurar la supremacía de la constitución. Según ellos, los límites prescriptos de nada sirven, desde que al congreso le sea lícito franquearlos, sin que ninguna autoridad pueda útilmente intervenir.

Otros invocan el principio de la independencia de los poderes. Si las interpretaciones de la magistratura, exponen, se hacen definitivas, la responsabilidad del presidente y de los miembros del congreso sólo existe en el nombre. La soberanía pasa á la oligarquía judicial, que á nadie debe cuenta de sus sentencias.

Las argucias jurídicas han sido las causas primordiales de estos debates.

La doctrina sobre las atribuciones judiciales, en punto á la conservación de la constitución, surge clara en el estudio de todas las cuestiones que pueden ocurrir, si se tiene presente las siguientes reglas:

1.<sup>a</sup> La magistratura «no puede romper una lanza con « el legislador (ni con nadie) por opiniones abstractas, « ni discutir con él puntos de derecho ó motivos de « oportunidad.» <sup>(1)</sup>

2.<sup>a</sup> «Para provocar su intervención se requiere un « conflicto y un peticionante, cuyos derechos persona- « les se encuentren realmente afectados. Sólo enton- « ces la potestad legislativa puede ser puesta en tela « de juicio y tachada de ilegitimidad.» <sup>(2)</sup>

De este modo, aunque la sentencia judicial no tenga, como no tiene, transcendencia efectiva fuera del caso en que se pronuncia, advierte á las cámaras y al presidente los obstáculos que los jueces opondrán á la aplicación de leyes que conceptúan inconstitucionales. La prudencia obligará siempre á respetarlos, si son razonables y acertados.

« Por otra parte, el poder judicial es sabiamente « mantenido en los límites de su propio terreno. No « se insistirá nunca demasiado sobre este punto. Ja- « más controla los actos legislativos, antes que surja « un litigio particular, que proporcione la ocasión de « aplicarlos.»

Es por esta combinación feliz que el poder moderador de la justicia se ha ejercitado en Estados Unidos, en la Argentina y en todos los países que han adoptado los mismos principios, sin causar trastornos.

La Edad Media nos ofrece casos de instituciones judiciales en que tribunales, organizados de una manera

(1) COOLEY.—Constitutional limitations, pág. 168.

(2) COOLEY.—Op. cit., pág. 163.

especial, tenían facultad para moderar los actos de los soberanos.

El viejo reino de Aragón conoció una institución de la que se han ocupado con elogio escritores españoles y extranjeros: el Justicia Mayor, cuyas atribuciones y procedimientos serían dignos de especial estudio. «To- « dos los actos de esta magistratura van encaminados « más que á fallar pleitos ó causas como órgano del « poder judicial, á mantener el imperio general de la « ley y conservar la armonía de los poderes consti- « tuidos, persiguiendo los casos de desafuero, para « resolver los conflictos que una providencia arbitra- « ria hubiese producido en las relaciones del individuo « con el Estado, ó de un poder con otro poder, ó de « las cortes con el rey, ó de los brazos entre si.» <sup>(1)</sup>

« El monarca, dice Estrada, al tomar posesión del « mando, jura en manos del Gran Justicia, que llevaba « el manto rojo del censor romano, respetar y conser- « var incólumes las tradiciones; y éste podía declarar « nulos los actos de la corona que las violaran. *Si rec- « ta facis rexeris; si autem non facis, non eris.* Todos « los tribunales seguían las interpretaciones que él daba « á las leyes, y á su criterio debían someterse las or- « denanzas y cédulas reales.» <sup>(2)</sup>

Pero, por más admiración que cause á las generaciones contemporáneas, encerraba un vicio orgánico que necesariamente debía hacerlo desaparecer. El Justicia Mayor discutía con el monarca y las cortes los actos realizados, antes de haber entrado en ejecución; era un censor constante que los poderes públicos tenían á su lado. Cuando las atribuciones de la corona se acrecentaban y cuando el poder del rey encontró bases firmes en que apoyarse, desoyó la indicaciones del Justicia y adoptó prácticas de índole muy diversa.

(1) SANTAMARIA.—«Curso de derecho político», pág. 582.

(2) ESTRADA.—«Derecho constitucional», pág. 529.

Todo gobierno se hizo imposible. El mecanismo defectuoso de un rodaje útil, moralizador y avanzado lo hizo suprimir.

Los parlamentos de Francia tenían como el Justicia Mayor, atribuciones en cierto modo judiciales. Podían oponerse á que se registrara los edictos de los monarcas que consideraban peligrosos á las libertades públicas, y esta facultad, que los colocaba en la situación de un poder moderador, dió margen á combates de doctrina, que excitaba celos, rivalidades y conflictos de solución difícil. Era menester que los parlamentos cediesen ante el solemne aparato de los *lits de justice*.<sup>(1)</sup> en que se seguía la máxima *advenientem principis cessat magistratus* ó que el monarca, humillado, capitulase ante la voluntad de la Nación. Ambos resultados ahondaban los antagonismos y provocaban represalias que hacían padecer al país. « Si el triunfo de la monarquía, hacía, á veces, el silencio en el parlamento, la victoria de la alta magistratura coincidía demasiado á menudo con los desórdenes interiores, las dificultades ó los infortunios nacionales. »

La organización del poder judicial en los Estados Unidos no trae aparejados estos inconvenientes graves. Los tribunales no discuten los actos del presidente, ni declaran teóricamente írritas y nulas las resoluciones del congreso. Sus sentencias, pronunciadas en casos concretos, después de prolijos estudios, no aparecen como airados y agresivos vetos judiciales. No tienen más efecto que eximir al postulante interesado del cum-

(1) Los *lits de justice*, expedientes usados por la corona para hacer primar su opinión y ordenar se registrara los edictos, eran conceptuados por los parlamentos como golpes de estado que violaban sus derechos. Se les llamaba así, según alguien, porque la justicia dormía en ellos, pero lo más seguro es que su nombre provino de que el rey, en las ocasiones difíciles, se sentaba ante el parlamento sobre un armazón de cojines ó almohadones. Véase E. DE LA HAUTIERE. — « La constitution et les institutions, 1895 », pág. 382, nota.

plimiento de una ley que se reputa contradictoria é incongruente con el texto ó el espíritu de la ley fundamental.

Por este medio se evita excitar las susceptibilidades, herir fueros, atacar privilegios y se logra la armonía entre los poderes. « Bajo estas condiciones complicadas, el control de la ley por los tribunales, escribe el duque de Noailles, ha podido subsistir en América con gran ventaja para los ciudadanos de quienes es la salvaguardia, y sin peligro real para los otros poderes. ¿Se temerá que la magistratura, aprovechando sus prerogativas, se transforme en oligarquía dominante? El poder judicial no dispone de ninguna fuerza material, y la mano de la justicia nada puede imponer *manu militari*, sin el auxilio del ejecutivo. Por lo demás, en caso de abuso, la cámara de representantes tiene la facultad de intentar contra el juez una acusación de *impeachment* y de llevarlo ante el senado. Este freno basta, según Hamilton, para calmar todas las desconfianzas, y al mismo tiempo, la cláusula que exige una mayoría de dos tercios para todo veredicto de condenación asegura garantías al magistrado inculcado. »<sup>(1)</sup>

La organización judicial argentina está calcada en los textos norteamericanos; pero aunque el engranaje constitucional es análogo en ambos países, nuestros tribunales se hallan impregnados de los hábitos de las viejas audiencias coloniales.

Las audiencias, por su elevada misión política y judicial, de acción social y de control de los otros magistrados y funcionarios, fueron, en el pensamiento del legislador al menos, el refugio de los pobres y la defensa contra las opresiones de los poderes, algo así como los « castillos roqueros », según la gráfica expresión de Solorzano.

(1) DUC DE NOAILLES. — Op. cit., tomo II, pág. 200.

Ninguna institución colonial ha trascendido, tal vez, tanto como las audiencias en nuestra legislación. Su reglamentación prolija y minuciosa ha servido de punto de partida para las sucesivas de nuestros tribunales patrios: el procedimiento, solemne y lento, los debates judiciales, largos y amanerados, aparecen infiltrados de las tradiciones y usos rutinarios, ligados por aquellas y transmitidos hasta hoy de generación en generación.

Sería, pues, un error pretender informar del espíritu que da vida á la judicatura nacional, inquiriendo sólo las prácticas de los Estados Unidos. A las ideas de los convencionales de Filadelfia debemos en gran parte la estructura del cuerpo político, la determinación de las funciones del poder judicial, pero sus modalidades específicas, su peculiar fisonomía es producto legítimo de nuestras costumbres.

## II. Número y jerarquía de los tribunales.

La constitución argentina, al fijar la naturaleza del poder judicial, no determina el número de los tribunales federales; habla sólo de la suprema corte y los demás tribunales inferiores. No indica siquiera el número de ministros de que se ha de componer el más alto tribunal.

La constitución de 1853, en su art. 91, que es el 94 de la vigente, estatuyó sobre este punto: «El poder judicial de la Confederación será ejercido por una corte suprema de justicia, compuesta de nueve jueces y dos fiscales, que residirán en la capital, y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciere en el territorio de la Confederación.»

La convención de Buenos Aires de 1860 consideró inconveniente en alto grado el número de jueces de que se componía la corte, y que se estableciera en la

ley fundamental su residencia obligatoria en la capital de la Nación, y proyectó como reforma, un artículo que decía así: «El poder judicial de la Confederación será ejercido por una corte suprema de justicia compuesta de cuatro jueces y un fiscal, que tendrá una sesión anual en la capital, y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciere en el territorio de la Confederación.»

Las razones que movieron á los convencionales de 1860 se encuentran latamente expuestas en el informe de la comisión: «La justicia federal debe ser activa y no pasiva; subordinarse á las necesidades sociales en su manera de proceder, en vez de subordinar esas necesidades á sus formas, y el número de jueces debe ser arreglado á la población, según lo indique la experiencia. De aquí las modificaciones hechas en el art. 91, que organiza la corte suprema, que siendo calcada sobre el plan de la corte federal de los Estados Unidos, se ha convertido en un cuerpo con funciones pasivas, á la manera de los antiguos anfictiones, ó más bien dicho, sin funciones, por el error de suponer que todas las causas que á ella competen habían de juzgarse en la capital y no en el lugar de su origen; de manera que la Nación tendría siempre que buscar á la corte y nunca los jueces á los ciudadanos, sistema contrario á toda buena administración de justicia. Este error capital traía consigo la necesidad de multiplicar las cortes federales en las provincias sometiendo ellas las causas que originariamente competían á la suprema corte, estableciendo inútilmente el grado de apelación en ellas, y aumentando inmensamente el número de jueces, de suyo muy exajerado, en la composición que la constitución da á este alto tribunal. Así, pues, la reforma del artículo 91 tiene por objeto quitar la condición impuesta por la constitución de